ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 25 DE MARZO DE 2019.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO		IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
22/2016	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL MENCIONADO ESTADO. (PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS)	3 A 49

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES
25 DE MARZO DE 2019**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA.
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
EDUARDO MEDINA MORA I.
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase dar cuenta.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se someten a su consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas números 27 ordinaria y 4 solemne, celebradas el martes diecinueve y el jueves veintiuno de marzo del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Están a su consideración las actas. Si no hay observaciones, en votación económica consulto ¿se aprueban? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

APROBADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Continúe, secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2016, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL MENCIONADO ESTADO.

Bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. ES PROCEDENTE PERO INFUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

SEGUNDO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS DECRETOS 309 Y 310, EXPEDIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LOS QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I; 90 FRACCIÓN V; 92; 137; 145; 153, FRACCIÓN I; 168; 179; 231; 287; 435; 457; 460; 464; 495; 663 Y 755, FRACCIÓN I, Y SE DEROGARON LOS DIVERSOS NUMERALES 85; 86; 87; 88; 90, FRACCIÓN II; 95, FRACCIONES II Y IV; 138; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153, FRACCIÓN II; 169; 184; 260; 261; 262; 263; 465, FRACCIÓN II; 473; 521; 647, FRACCIÓN II; 660; 665 Y 667, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario. Señoras y señores Ministros, voy a someter a su consideración los primeros considerandos: el primero, competencia; segundo, precisión de normas impugnadas; tercero, oportunidad; cuarto, legitimación activa; y quinto, causas de improcedencia. Están a su consideración. ¿Hay alguna observación? Si no hay observaciones, en votación económica consulto ¿se aprueban?
(VOTACIÓN FAVORABLE)

APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Dígame usted, señor Ministro Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Nada más con alguna variación que expresaré en los conceptos generales sobre el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perfecto, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Una salvedad, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias. Entonces, es unanimidad de votos en estos apartados, con la salvedad del Ministro Luis María Aguilar, la cual expresará en el momento en que se pronuncie sobre el proyecto, en general.

Sometemos ahora a consideración y votación el considerando sexto; marco general que incidió en la reforma y derogación a diversos preceptos del Código Civil de Aguascalientes, que se controvierten en este proceso. Está a su consideración este apartado.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: ¿Perdón?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Es el apartado general en donde hace una descripción de antecedentes y demás. En votación económica consulto ¿se aprueba?

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Perdón, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Dígame usted.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: El considerando sexto se divide en tres partes ¿no? Las razones de la exposición, la evolución del marco jurídico nacional y convencional, y los informes, observaciones y recomendaciones; entonces, me disculpo.

Traigo unas observaciones en el apartado 2. Fundamentalmente, puede incidir porque en el párrafo último de la página 49 y principio de la 50 se dice que el legislador de Aguascalientes tuvo como propósito derogar la figura del matrimonio de menores, así como todas las disposiciones que pudieran implicar el reconocimiento o permisión de dichas figuras, entre ellas, se

menciona la emancipación y la capacidad para administrar bienes. Considero que la emancipación y la capacidad para administrar bienes por parte de menores de edad no derivan sólo del matrimonio y, en este sentido, tendríamos que cuestionarnos que el legislador de Aguascalientes eliminara algunos artículos, que regulan esas figuras y que no están estrechamente vinculadas con el matrimonio de menores de edad, fue correcto o no.

En esta parte del proyecto me separaría, en el sentido de que creo que sería correcto —a mi juicio y si lo estima así el ponente— precisar que el legislador eliminó figuras que —en su consideración— implicaban un reconocimiento, permisión, al matrimonio de menores, sin que esta Corte juzgue que todas estas figuras estén realmente vinculadas a la figura de la emancipación, ¿qué hizo el legislador de Aguascalientes? Todos aquellos artículos que tuvieran la palabra “emancipación” los derogó, pero hay ciertos artículos que también se reclaman, en vía de consecuencia, que no tienen que ver con el matrimonio entre adolescentes y que también se eliminó la cuestión de la emancipación; son diversas normas que me referiré al final del proyecto, pero que inciden, no todas están vinculadas al matrimonio.

También me separaría de la página 53, párrafo penúltimo, y en la página 62. Es cierto —como dice el proyecto— que el derecho a contraer matrimonio no está expresamente reconocido en la Constitución, pero está reconocido en ordenamientos convencionales suscritos por México y, en este sentido, es a través, precisamente, de los artículos 1º y 133 constitucionales que se ha dado este reconocimiento.

Además, la Primera Sala sostuvo que el reconocimiento del derecho del matrimonio está inmerso en el artículo 4° constitucional, entonces, –en dado caso– haría un concurrente.

También me separaría de las páginas 61 y 63, en el sentido de las consideraciones en relación con el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, porque se dice que se estableció la posibilidad de que, ahí se decía que abandonó la posibilidad de otorgar dispensas; no coincido con esta afirmación porque creo que se le puede dar otra interpretación –a mi juicio– diferente al artículo 2 y, por lo tanto, en este apartado, concretamente al resolverse la pregunta segunda, estaría con salvedades y con un voto concurrente. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministra. Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Creo que mi intervención va a ir muy de la mano con lo que acaba de decir la Ministra Piña. Me parece que, en cuanto a la emancipación, el proyecto no aborda los artículos que se encuentran dentro del decreto, y el decreto concreto es lo que está impugnado.

Quiero entender la razón por la cual no está abordado, es decir, requeriría una suplencia de la queja porque el accionante solamente ataca la prohibición o la permisión del matrimonio, y no ataca la emancipación o los artículos de la emancipación; por lo tanto, uno entiende que el proyecto tilda de constitucional estas

reformas y no entra a suplir, para no suplir y luego declarar constitucionales las normas que forman parte del decreto.

Tengo otra visión de la emancipación. Me parece que es necesario entrar a estudiar los artículos de la emancipación, sobre todo, porque la regla de matrimonio es con una edad fija, es decir, es a los dieciocho años, por lo tanto, podría convivir la emancipación con la prohibición al matrimonio de menores de dieciocho años, por tener una regla fija, y me parece que eso nos obligaría a suplir y entrar a estudiar los artículos de emancipación, esa sería mi postura. Entiendo que el proyecto no lo hace, por llegar a la conclusión de que esos artículos son inconstitucionales, me separaría de esa parte del proyecto. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Gutiérrez. Simplemente, recuerdo al Tribunal Pleno que votamos el apartado de precisión de las normas impugnadas; entonces, este capítulo sexto va sobre la misma lógica del proyecto. Sí, Ministro.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Perdón, señor Ministro Presidente, por mi segunda intervención.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, adelante.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Las normas que están impugnadas abordan la emancipación, además del tema de matrimonio; entonces, la precisión de la litis en el capítulo tercero es correcta.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perfecto, muchas gracias. Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Muchas gracias, señor Ministro Presidente. En relación con este tema de la emancipación –obviamente– ya votado, la norma efectivamente impugnada es el artículo 145 y las demás, por vía de consecuencia. En Aguascalientes, el matrimonio estaba planteada como la única manera de emancipación; en esa lógica, pueden persistir o sobrevivir las dos.

En relación con el punto uno de este apartado sexto, creo que este Pleno no ha reconocido que el derecho al matrimonio derive del artículo 1° de la Constitución Federal, como se señala en la página 51, y que el derecho al matrimonio no se encuentra reconocido en los artículos 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el 145 –impugnado– del Código Civil del Estado de Aguascalientes, los cuales sólo establecen la edad mínima para contraer matrimonio –en la páginas 53 y 54–.

En relación con el punto 2, se considera que, independientemente de la posibilidad de otorgar la dispensa prevista en el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, que no se haya reiterado en instrumentos internacionales posteriores, alude a un supuesto distinto del que contemplaba el artículo 145 antes de la reforma impugnada, como se explica más adelante, respecto de las páginas 61 y 62.

En relación con el punto 3 de este apartado sexto, se estima que el establecimiento de una edad mínima, como condición para contraer matrimonio, no constituye una restricción, sino una modalidad al ejercicio de este derecho, y que la posibilidad de otorgar la dispensa prevista en el artículo 2 nunca operaría respecto de menores, ya que, conforme a lo señalado en el preámbulo de la propia Convención, el matrimonio infantil debe ser abolido.

Así también, se estima que la razón por la cual el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no prevé la posibilidad de otorgar dispensas, en su concordancia con diversos instrumentos internacionales que prohíben el matrimonio infantil, y guardando la edad mínima para contraer matrimonio con la edad en la que se deja de ser menor conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto de esto, haré un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Ya que están mencionando esto, brevísimamente, también en relación con este sexto considerando. Simplemente quiero apuntar que me aparto de ciertas consideraciones porque estimo que se encuentra inmerso en el libre desarrollo de la personalidad –precisamente– la libertad de decidir contraer matrimonio o no hacerlo y, en ese sentido, la posibilidad de formar una familia, bajo cualquier modelo válido, no implica que el matrimonio por sí mismo –desde mi punto de vista– sea un derecho o una necesidad esencial para el

desarrollo de las personas, sino es la libertad de decidir o no hacerlo, en el marco del libre desarrollo de la personalidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Algún otro comentario? Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Intervengo, no lo pensaba hacer, porque iba a hacer la exposición de fondo, pero surgieron estos temas que involucran –lógicamente– la médula del fondo de este asunto.

En realidad, algunas de las observaciones que se han formulado, me llegaron muy reciente a esta sesión, y me comprometí a que las revisaría y, en su caso, incorporaría aquello que pudiera servir para –digamos– darle mejor sentido al proyecto; quiero decir que, efectivamente, la emancipación es una figura que puede operar para otras cuestiones; sin embargo, se está analizando a la luz de lo planteado en este asunto; por eso, en el proyecto se eludió entrar a otro tipo de problemas que conlleva a la emancipación.

Aquí se planteó en función del planteamiento que formuló el ombudsman local respecto de la emancipación, en relación con el matrimonio de menores.

Consecuentemente, en ese sentido, así se fijó; entonces, simplemente hago estas aclaraciones previas y después haré otras, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Franco. Estoy de acuerdo con este apartado porque,

efectivamente, como acaba de mencionar el Ministro ponente, todos los artículos impugnados, además del artículo principal, los que se refieren a emancipación –también– se impugnan en relación con la edad mínima para contraer matrimonio, no se impugnan por sí mismos, no se impugna el tema de emancipación como tal, pues no es el tema de la impugnación; de tal suerte que me parece que la descripción que hace el ponente, como un capítulo previo a analizar el fondo, es adecuada, y no quiere decir –al menos así siempre he entendido estos apartados– que tengamos que suscribir todas y cada una de las afirmaciones o manifestaciones que hay en este apartado, sino que no presentan inconsistencias para efecto de lo que viene después.

Me parece que este apartado es lógico con el planteamiento del proyecto, con la forma como se estableció la demanda, porque –reitero– el tema es la dispensa o no en relación con la edad mínima para contraer matrimonio, no tanto la emancipación o muchos otros temas que –obviamente– están relacionados; de tal suerte que estaré, en esta parte, con el proyecto. Ministra Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Nada más una disculpa por intervenir por segunda ocasión.

Estoy de acuerdo que eso lo tendremos que discutir cuando lleguemos al final; por eso, en esta parte, solamente sugería que se matizara, porque se está afirmando que el legislador lo hizo con el propósito de derogar la figura del matrimonio entre menores, así como todas las disposiciones que pudieran implicar el reconocimiento o permisión de dicha figura –así se dice en el proyecto– y, precisamente, para ir preparando el fondo, si vamos a

entrar en suplencia de queja o no, porque están impugnados los artículos; –será cuestión de verlo cuando llegemos a esa parte– pero, con la finalidad de ir preparando, precisamente, esa discusión, sugería que se matizara que, en consideración del legislador, implicaba un reconocimiento o permisión al matrimonio de menores, sin prejuzgar que esta Corte estimará que todas esas figuras efectivamente estén o no vinculadas con el matrimonio.

¿Qué hizo el legislador de Aguascalientes? Quitó la figura de la emancipación, derivado del matrimonio entre adolescentes, pero en artículos que nada tienen que ver con el matrimonio y que – incluso– el Código Civil lo reconoce en otros artículos, por ejemplo, de menores de edad cuando se los otorgan los padres por determinación judicial para administrar bienes, etcétera, no hay concepto de invalidez, pero están impugnados; entonces, mi consideración en este apartado era matizar esa parte; después discutiremos si vamos a entrar o no, pero matizar porque el legislador lo hizo así, porque él consideró que todas derivaban del matrimonio, pero eso no es cierto; entonces, por eso era una cuestión nada más de matiz, sin entrar a discutir el fondo, que es cuando sea procedente realizarlo, si vamos a entrar a discutir o no –de oficio– la validez o invalidez de esas disposiciones que están impugnadas, vía consecuencia, pero no hay conceptos de invalidez. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministra. Ministro González Alcántara.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Muy sencillamente. La institución de la emancipación, si la

contempláramos como una posibilidad autónoma separada de la parte del matrimonio, podría ser interpretada como contraria al interés superior del menor, porque lo dejaríamos desprotegido y la tendencia es hacia la protección; creo que la observación de la Ministra es muy correcta y quizás algún señalamiento que hiciera el ponente al respecto solucionaría esa situación. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Insisto en que creo que el proyecto es correcto, se derogó lo que se derogó —es lo que está diciendo este capítulo—, ¿por qué nos vamos a adelantar si vamos a analizar o no cosas que no están impugnadas? Si, eventualmente, la mayoría quiere entrarle y en suplencia de la queja, eventualmente, se logra invalidar por esas razones, habría que ajustar este apartado; pero, en este momento, me parece que, por las mismas razones que se quiere que se incluyan otras cosas, me parece que no se deben incluir, porque se está analizando en este momento una derogación y, a partir de ahí, —según el accionante— afecta otros artículos.

Digamos, es un capítulo meramente descriptivo de lo que pasó; creo que si le empezamos a meter más cuestiones, entonces vamos a estudiar y discutir el fondo en el capítulo previo; de tal suerte que, salvo que el ponente modifique su capítulo, creo que cumple el propósito para el que está.

Siempre hemos tenido problemas con este tipo de apartados. Una compañera nuestra —que ya no está ahora— decía: siempre me he apartado de estos capítulos; pero eso también depende de la percepción de cada quien. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Estoy de acuerdo con que subsista este capítulo introductorio, aun reconociendo que muchas de las conclusiones que en él se establecen pudieran anticipar el sentido que los considerandos establecen como razones de validez que el proyecto conlleva.

En la inmensa mayoría de los casos que presentan ante este Tribunal Pleno, siempre se acompaña un capítulo de esta naturaleza. Como bien lo dice, una de las objeciones era no anticipar las conclusiones; sin embargo, en la apertura que el ponente siempre tiene respecto de este tipo de capítulos, conforme la discusión avanza y cada una de las propuestas pervive o no, se van ajustando.

Por eso, en mi insistencia de que este tipo de capítulos permiten tener una aproximación muy clara de la acción de inconstitucionalidad o, en su caso, las controversias persiguen, muy en lo particular, en temas tan sensibles como el matrimonio de menores, debe subsistir, en el entendimiento de que seguramente el ponente —con esto no anticipo—, si hubiere algún cambio en la votación que modificara las conclusiones que el proyecto tiene, se harían los ajustes en el capítulo que se propone, capítulo que —además— está aprobado. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Reiteraré el posicionamiento que

señalé, me parece que esto responde a la lógica del planteamiento que se formuló en el asunto, y no hay que olvidar —lo anticipo— que la emancipación está vinculada al matrimonio y, por eso, precisamente —al margen de lo que veamos— es que se tomó la determinación de plantearlo de esta manera.

Entonces, —con el mayor respeto a las opiniones que se han formulado— esta parte del proyecto la conservaría en sus términos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Sírvase tomar votación, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Con el sentido del proyecto, apartándome de consideraciones y anuncio voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor del proyecto.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Con el sentido del proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Con el proyecto, con excepción del considerando del que me aparté expresamente.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto, con algunas salvedades en este punto.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Estoy con el proyecto, en contra del párrafo último de la página 49 y principios de la 50, porque es una afirmación que hace este Tribunal Pleno, no es una descripción que hizo el legislador; no comparto esa conclusión.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Con el proyecto, en contra de algunas consideraciones, anticipo un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con este considerando, en el entendido de que, de no prosperar el proyecto, se harían los ajustes —supongo—.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto; con anuncio de voto concurrente del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien vota en contra de las consideraciones; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de algunas consideraciones; el señor Ministro Pardo Rebolledo, con salvedades; la señora Ministra Piña Hernández, en contra de la consideración final de la página 49, inicios de la 50; señor Ministro Medina Mora, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con precisiones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Perdón.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Dígame, señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, señor Ministro Presidente. También me apartaría de lo señalado en las páginas 61 y 63, la afirmación de este Tribunal Pleno de que no tiene vigencia el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, y formularé voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Tome nota, secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pasaríamos ahora al considerando séptimo, que es el estudio de fondo del asunto, el Ministro ponente divide este estudio en seis apartados, iremos pidiéndole exposición de cada uno de ellos; discusión y votación de cada uno de ellos pediré a este Tribunal Pleno.

Esto, con independencia de que, si alguna Ministra o Ministro quiere hacer un pronunciamiento en general sobre el proyecto, – obviamente– puede manifestarse de la forma que más convenga a la claridad expositiva del asunto, como siempre se ha hecho.

Vamos a ver ahora el estudio de fondo, el apartado 1, que trata de responder a la pregunta: “¿El legislador de Aguascalientes violó el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios al eliminar la posibilidad de otorgar

dispensas –en casos graves y justificados– a menores de edad para contraer matrimonio?”. Señor Ministro Franco. Perdón.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Quisiera, señor Presidente, si me permite.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, adelante.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: De una vez hacer el pronunciamiento general sobre todos los temas que se van a tratar, para que nada más vaya reiterando mi criterio en general con los temas que vaya exponiendo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Le rogaría –señor Ministro– si pudiera el Ministro Franco hacer la exposición –por lo menos de este apartado–, para que se pueda saber cuál es la temática y, después de que exponga este primer apartado –que de alguna manera afecta a todos–, el Ministro Luis María Aguilar dará su exposición.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Así lo hacemos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sobre todo el proyecto y ahí abriré sobre todas las demás opiniones o comentarios. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Presidente. Previo a plantearles el contenido del proyecto, respondiendo esta pregunta concreta que planteó el Presidente,

quisiera hacer algunos comentarios que tienen que ver con observaciones que se me formularon.

En primer lugar, quiero decir que éste es un asunto complejo –en mi opinión– que nos llevó mucho tiempo estudiarlo, tratamos de presentar lo que –a juicio del ponente– es la solución correcta y, tomando en consideración algunas opiniones que llegaron previamente y que tomaremos en consideración, al margen de lo que vaya surgiendo en el curso de la sesión, algunas otras que fueron presentadas al ponente.

El Ministro González Alcántara tuvo la gentileza de enviarme una nota con sus observaciones, y señaló que no tendría inconveniente en incorporar la que se relaciona con el énfasis sobre la incidencia sobre el matrimonio infantil en las niñas –que él me subrayó mucho– y que hay alguna mención en el proyecto específica al respecto, pero que, con mucho gusto, lo haremos por la importancia que tiene este punto que él señala.

También, obviamente, la necesidad de explicar por qué la eliminación de las dispensas constituye una restricción al derecho a contraer matrimonio; este punto –curiosamente– pone de manifiesto la complejidad del asunto; porque acabamos de escuchar que el Ministro Medina Mora –precisamente– considera que no es una restricción, sino una modalidad, voy a seguir estableciéndolo como restricción, por las razones que se analizan en el cuerpo del asunto, sin embargo, si en su momento se llegara a una decisión distinta del Pleno, estaría totalmente de acuerdo.

Sin embargo, seguiré reflexionando y, a la luz de la discusión, veré la incorporación de otra observación que me formula el Ministro González Alcántara, en el sentido de que, en materia del estado civil, la concurrencia de los Estados viene dada fundamentalmente —y desde 1917— por el artículo 121 constitucional.

Aquí lo he venido estudiando, porque considero que hubo reformas a la Constitución que han venido cambiando esto, como fue la reforma al artículo 130, en sus dos últimos párrafos y, por supuesto, la reforma por la que se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73 constitucional, que son las facultades y, por supuesto, respetaré su derecho a elaborar un voto si así lo considera.

También, respecto a observaciones que me hizo llegar previamente la Ministra Piña, con mucho gusto podría incorporar las que me mandó respecto al considerando sexto, relativo a la evolución del marco jurídico nacional y convencional, en donde haré algunas aclaraciones en relación con la nota que me mandó la Ministra.

También matizaré —como me lo solicita, aunque estoy convencido de que las hay— en las páginas 92, el párrafo último, y en la 101 y 102, porque ella tiene la preocupación de que no se hable tajantemente de que el Estado Mexicano recibió observaciones directas respecto de la edad del matrimonio; consecuentemente, no tendría inconveniente en hacerlo porque no va a cambiar el sentido del proyecto y si el Pleno no tiene inconveniente —también—, es cuestión de matizar.

Las otras observaciones —como lo dije al principio, señor Presidente, señoras y señores Ministros— las iré analizando a la luz de lo que resuelva el Pleno.

Dicho lo cual, entro a la parte —a partir de la página 81, como lo sugiere el Ministro Presidente— en donde se desarrolla la primera pregunta: “¿El legislador de Aguascalientes violó el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios al eliminar la posibilidad de otorgar dispensas —en casos graves y justificados— a menores de edad para contraer matrimonio?” Voy a procurar ser breve en esta parte.

Para dilucidar esta cuestión, se propone un estudio evolutivo, a partir del cual se evidencia que, si bien la referida Convención prevé la posibilidad de otorgar dispensas por razón de la edad para contraer matrimonio, lo cierto es que existen otras convenciones especializadas en la protección de los derechos de los niños y de las mujeres que, al hacer referencia al matrimonio, no prevén ya la figura de las dispensas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció sobre el tema del matrimonio de menores, en su Asamblea General de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en donde, apoyándose en diversas resoluciones previas, en sus puntos 9 y 15 —página 77 del proyecto— claramente señala el objetivo de erradicar el matrimonio entre menores, al señalar textualmente lo siguiente: “9. Insta a los Estados a que prevengan y eliminen el matrimonio infantil, precoz y forzado mediante la abolición de las barreras a la educación, en particular garantizando que las niñas y

los niños casados, las niñas y las mujeres embarazadas y los padres jóvenes sigan teniendo acceso a la escolarización, mejorando el acceso a la educación formal de calidad y a programas de desarrollo de aptitudes.” Sigue considerando qué acciones se deben tomar en esos casos.

En el párrafo 15 señala textualmente: “Alienta a las entidades y los organismos competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales, en el marco de sus respectivos mandatos, la sociedad civil y otros agentes pertinentes y mecanismos de derechos humanos a que sigan colaborando con los Estados Miembros para formular y aplicar estrategias y políticas a nivel nacional, regional e internacional dirigidas a prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado y prestar apoyo a quienes contrajeron matrimonio cuando todavía eran niñas o niños.”

La anterior resolución se reafirmó por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su período ordinario de sesiones del seis al veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

Tales resoluciones, al ser aplicadas por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, han tenido diversos alcances pues, en relación con México, dichos comités han recomendado —el primero, de los derechos del niño— textualmente que: “el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA [Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes], asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio, por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años

en las leyes de todos los estados”; sin señalar la posibilidad de otorgar dispensas a menores de dieciocho años para contraer matrimonio.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer formuló observaciones a México, mediante oficio datado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en el que señaló textualmente su punto 52. “el Comité recomienda al Estado parte —dígase a México— que vele por la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo que la edad mínima de matrimonio de muchachas y muchachos, que es de 18 años, se refleje en las leyes de todos los estados y se respete en la práctica en todo el país”. Tampoco se refiere, en ese oficio, a la posibilidad de que existan dispensas.

Dicho escenario nos lleva a considerar que, contrario a lo sostenido por la Comisión de Derechos Humanos, y hay —obviamente— otras referencias, apoyos que tiene este punto de vista de que los matrimonios no tengan dispensas a lo sostenido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; en el caso, no podría afirmarse que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, en tanto norma convencional de jerarquía superior, es la única que debe definir la decisión del presente asunto; por el contrario, tal estudio evidencia que, para tomar una decisión al respecto, es necesario atender a una diversidad de normas, cuyo alcance, en el presente caso, debe ser establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En atención a lo anterior, se considera necesario hacer una segunda pregunta. No sé si quiere.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, creo que vamos una por una, como fijamos la metodología.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señor Ministro Presidente. En general, coincido con el sentido del proyecto y me separo, sin embargo, de algunas consideraciones en las que se apoya.

Inicialmente, me aparto de las consideraciones en que se afirma que la edad mínima constituye una restricción al derecho humano a contraer matrimonio, así como aquéllas en que se equipara la posibilidad de obtener una dispensa de edad para contraer matrimonio con un derecho fundamental.

Desde la discusión de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en que se analizó la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, y se eliminó la restricción que tenían las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio, me he posicionado en el sentido de que el contrato de matrimonio, visto de forma aislada, no constituye un derecho humano o una institución constitucionalmente protegida en sí misma; más bien, se trata de una figura vinculada con otras instituciones y principios que se encuentran tutelados por la Norma

Fundamental y por diversos instrumentos internacionales, sobre todo, con la protección de la familia y el derecho de cada persona a diseñar su plan de vida.

De ahí que en la regulación de dicha institución civil, cobra relevancia el respeto al principio de igualdad y el derecho a no ser discriminado.

Por esto último, en asuntos más recientes, como la acción de inconstitucionalidad 28/2015 –fallada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis– sostuve en un voto particular que el excluir el matrimonio para las parejas homosexuales —esto es, en atención a su orientación sexual— incumple con la finalidad legítima de proteger a la familia y, por tanto, resulta una medida discriminatoria.

Bajo mi entendimiento, como la Constitución Federal –ciertamente– no define con precisión qué es el matrimonio y bajo qué condiciones puede llevarse a cabo, se trata de una institución de derecho civil respecto de la cual, en principio, las entidades federativas cuentan con amplia libertad configurativa, siempre y cuando —insisto— su regulación no sea contraria a alguna norma constitucional o a algún derecho fundamental.

En este sentido, considero que la edad mínima para contraer matrimonio constituye un elemento respecto del cual la libertad configurativa del legislador se ha reducido.

Es cierto que en el pasado reciente, tanto la ley como la sociedad, en general, eran más flexibles en cuanto a la satisfacción de ese

requisito que, en muchos casos, pudiera resultar irrelevante para la adecuada conformación de la familia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto a nivel nacional como internacional se han emitido normas dirigidas —específicamente— a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que tratan de enfrentar distintas problemáticas que les afectan: una de ellas, las consecuencias negativas que, en determinados contextos, trae consigo el matrimonio infantil; de ahí que en la actualidad se imponga asumir una posición más rígida en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio. Tan es así que en el artículo 2, de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios —de mil novecientos sesenta y dos— se estableció la posibilidad de que la autoridad competente dispensara la edad por causas justificadas y en interés de los contrayentes; sin embargo, la posibilidad de dispensa para contraer matrimonio no ha sido reiterada en otras convenciones que hacen alusión al matrimonio, incluso, en el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se establece que “no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños”. De ahí que en la actualidad se imponga asumir una posición más rígida en cuanto a la edad mínima para casarse.

Por ello, no coincido en el sentido de que el establecimiento de una edad mínima de dieciocho años para contraer matrimonio constituye una restricción a un derecho fundamental; más bien, considero que la libertad de conformar una familia, a través de la institución del matrimonio, se encuentra condicionada a requisitos

básicos, como el consentimiento libre y pleno de los contrayentes y correlativamente, con una edad mínima para acceder a esa figura.

De esta forma, no concuerdo con abordar el estudio de la acción de inconstitucionalidad partiendo de que los menores de edad tienen derecho al matrimonio y que, por tanto, gozan del derecho a obtener una dispensa para contraerlo antes de la edad requerida, pues –reitero– la figura del matrimonio ha sido limitada para los mayores de edad, precisamente, para salvaguardar los derechos de los niños.

Me aparto –en este contexto– del proyecto en la parte que plantea la aplicación de un test de escrutinio estricto para evaluar la constitucionalidad de la medida legislativa impugnada, pues no creo que la solución del problema planteado implique el análisis de la validez de una distinción motivada en una categoría sospechosa a la luz del principio de igualdad, sino que –en mi opinión–, para resolver el caso, basta delimitar el ámbito de la libertad del derecho a formar una familia, en este caso, a través del matrimonio.

En efecto, considero que el escrutinio estricto de medidas legislativas debe dirigirse a aquellos casos en que se establecen distinciones que se presumen arbitrarias, por motivarse en una categoría sospechosa, para definir, si en el caso, se está o no frente a un acto discriminatorio; sin embargo, partiendo de la idea de que el matrimonio no es una institución disponible para los niños, estimo que, en el presente asunto, no existe propiamente una distinción; de ahí que el análisis de la medida legislativa

cuestionada no involucra una decisión vinculada con el principio de igualdad pues, tratándose del acceso al matrimonio, los niños y los adultos no se ubican en el mismo plano; tampoco me parece correcto afirmar que, en este caso, la edad constituye una categoría sospechosa que pudiera generar la presunción de excluir a los menores de edad de la posibilidad de contraer matrimonio, que constituye una distinción arbitraria pues, por el contrario, se trata de una limitación dirigida a proteger sus derechos.

En relación con lo anterior, me parece difícil admitir lo planteado en el proyecto, en el sentido de que la Suprema Corte debe evaluar cuál medida es más idónea para proteger los derechos de los menores, a partir de la confrontación de los pros y contras del establecimiento de dispensas frente a su eliminación, –como se hace, con mucha claridad, en el proyecto en una tabla comparativa–. Ello, porque estimo que se trata de una ponderación que ya ha sido realizada tanto por la comunidad internacional como por el legislador nacional, que han emitido normas a partir de las cuales se puede afirmar que, en nuestro orden jurídico, la edad mínima para contraer matrimonio es de dieciocho años, sin excepción alguna, como lo establece el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A partir de lo anterior, –desde mi perspectiva– la fijación de una edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones, constituye una forma de delimitar la libertad de formar una familia a través del matrimonio, que tiene por objeto la protección de los derechos de los niños, frente a lo cual no podría prevalecer la

necesidad de otorgar dispensas, pues éstas no encuentran sustento en ninguna norma constitucional, en un derecho humano como tal, ni en las convenciones internacionales.

No desconozco que en los precedentes de esta Suprema Corte, relacionados con la restricción del matrimonio a personas del mismo sexo, he coincidido en que nuestra Constitución no establece una única forma de familia, y que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás.

Asimismo, el matrimonio trae consigo la satisfacción de diversos derechos que se mencionaron en aquel asunto, como los fiscales, de seguridad social, migratorios y algunos otros. Sin embargo, tales consideraciones parten de la idea de que se trata del matrimonio entre mayores de edad, pues tanto en el derecho interno como en el internacional se ha establecido una edad mínima, como garantía para evitar que los niños sufran los múltiples efectos negativos del matrimonio infantil, como puede ser –se ha mencionado en el proyecto– la limitación para continuar con su educación.

De ahí que, en el aparente plan de vida de menores que pretendan casarse, o bien, la obtención de beneficios derivados de esa figura de derecho civil, no puedan, de ninguna manera, justificar que se generen excepciones que permitan que otros niños y niñas vean limitados su desarrollo.

Sobre esta base de que el matrimonio no es un derecho humano en sí mismo que los niños puedan ejercer, considero que la reforma impugnada tampoco transgrede los principios de universalidad y progresividad pues, por el contrario, se trata de una medida legislativa dirigida a ampliar su protección y, por lo tanto, en su beneficio.

Por estas razones, en general, coincido con el sentido del proyecto, pero bajo estas consideraciones distintas. Muchas gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Para efectos metodológicos, recuerdo a las señoras y señores Ministros que, con independencia de la atribución que tienen para pronunciarse sobre cualquier tema, estamos analizando la primera pregunta del apartado séptimo y, sobre ello, tomaré votación, en su momento.

Señora Ministra Norma Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, señor Ministro Presidente. Concretamente me referiré a la pregunta que estamos analizando; primero, quiero hacer patente mi felicitación al señor Ministro ponente: el proyecto está muy bien desarrollado, va paso por paso, y nos lleva a tomar una decisión final; está muy bien documentado y analizado, lo quiero felicitar sinceramente.

Sentado lo anterior, estoy con el sentido de la respuesta a la pregunta. Partimos de decir que si el legislador de Aguascalientes violó o no el artículo 2 de la Convención, y de los argumentos que se desarrollan podríamos –ya que no lo dice expresamente el

proyecto— llegar a la conclusión de que no lo violó porque éste ha sido implícitamente derogado, en función de que hay otras convenciones que no se han referido o que no han reiterado esta misma disposición.

Aun cuando comparto el sentido del proyecto, me apartaría de las consideraciones que lo sustentan, porque creo que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios admite —a mi juicio— otra interpretación: lo que estableció ese artículo fue una prohibición expresa para establecer un matrimonio infantil o también llamado temprano, que es cuando los dos cónyuges o uno de ellos es menor de dieciocho años.

En este sentido, no constituye —para mí— una obligación del Estado establecer dispensas, derivadas del artículo 2 de esta Convención; dicho de otro modo, considero que la dispensa sólo se previó como una posibilidad de excepción a la restricción de la edad, pues se manejó expresamente como una salvedad, de modo que podríamos considerar que es una facultad potestativa o discrecional para que cada Estado parte, en su legislación interna, conforme a su libertad de configuración, determinara si era procedente o no —de acuerdo al contexto nacional— regular dicha excepción a la restricción de edad para el ejercicio del derecho al matrimonio, pero que se tendría que tratar de causas justificadas y el interés de los menores; pero —a mi juicio— la dispensa judicial no se previó como un derecho o prerrogativa fundamental a favor de los menores de edad y, por ende, de ese precepto no puedo derivar necesariamente una obligación o deber de carácter vinculante, para los Estados parte de esa Convención, de prever

excepciones para que se permita el matrimonio de menores de edad.

En este sentido, no compartiría lo dicho en páginas 92 y 94, de que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño no sea reiterada ni reconocida la posibilidad de establecer dispensas; primero, porque no eran unos convenios que estuvieran sobre la materia específica, el otro convenio era una materia específica de la regulación del matrimonio y, en realidad, existe una Recomendación General 31, que se dio por parte del Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, que incluso lo señala el proyecto cuando establece el marco general para el análisis del asunto.

La Recomendación General 31 dice expresamente que es posible reconocer la dispensa judicial, siempre y cuando los adolescentes tengan un conocimiento pleno, consciente e informado, y que no se trate de justificar con ello, ni se vean involucradas tradiciones y cuestiones culturales que incidan en ello.

En esa Recomendación General 31 también hay una parte que dice que es posible hacerlo, pero que eso se tiene que ver en función de la realidad del país. Por lo tanto, me apartaría de las consideraciones sobre esta pregunta en concreto, pero llegaría a la misma conclusión que da el proyecto, en el sentido de que se debe analizar para la resolución de este asunto, no sólo el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el

Registro de los Matrimonios, sino todas las disposiciones que están acordes con esta figura, y no propiamente porque haya una derogación implícita de esa Recomendación. Le doy otra lectura al artículo 2 de la Convención y, por eso, haría –nada más– un voto concurrente. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministra. Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero, en primer lugar, destacar la calidad del proyecto del Ministro Franco, y lo digo porque para sus colegas es mucho más sencillo abordar el análisis de un tema tan complejo – como él lo expresó– precisamente porque partimos de un proyecto; si uno se enfrentara directamente con la acción y con las normas, pues no tendríamos la riqueza de discusión y de reflexión, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Habiendo dicho eso, con su permiso y expresando una disculpa, señor Presidente, por no referirme sólo a la pregunta en cuestión, voy a hacer un posicionamiento que se refiere a todo el proyecto, porque no comparto la metodología a partir de la cual se elabora. Esto es una reacción –obviamente– al análisis del proyecto que –como dije– es muy adecuado; además, agradezco las adiciones que se hicieron al mismo, porque nos permitió conocer respuestas muy concretas a algunos de los *amici curiae* que se fueron adicionando al expediente.

En principio, –como dije– la metodología no la comparto en su totalidad; estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, me aparto de algunas consideraciones, pero me parece que hay que analizar la cuestión que –efectivamente– se plantea, en lugar –

necesariamente– de dar respuesta a todos los argumentos o cada uno de los argumentos que plantea la accionante, porque no todos son en un lugar de inconstitucionalidad y otros se refieren a argumentos que hacen sujetos que intervienen en el procedimiento

Sin perjuicio de ello, se considera que no se está ante una restricción del derecho al matrimonio, sino como anticipantes ante una modalidad en el ejercicio de este derecho, establecida en atención al interés superior del menor; en este sentido, la constitucionalidad de la norma –efectivamente– impugnada no debe examinarse a la luz de un test de escrutinio estricto, sino confrontándola directamente con lo dispuesto por los instrumentos internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es parte que, a diferencia de la Constitución General, reconocen expresamente el derecho a contraer matrimonio y son consistentes en prohibir el matrimonio infantil, en el que uno a ambos contrayentes son menores, en el caso de México en congruencia por lo señalado en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “menor de dieciocho años”, al respecto, creo que debe precisarse que la posibilidad de otorgar dispensas a la que se refiere el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio; la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y, el Registro de los Matrimonios nunca opera respecto de menores, ya que, conforme a lo señalado en el preámbulo de la Convención, el matrimonio infantil debe ser abolido. Luego, debe entenderse que para casos en que, habiéndose cumplido dieciocho años o alcanzado la mayoría de edad, no se tenga la edad mínima para contraer matrimonio.

Ahora bien, cuando sujetar el ejercicio del derecho al matrimonio a una condición de edad, –contrario a lo sostenido en esta consulta– incide en la autonomía y vida privada de los menores, se justifica en la protección reforzada que debe tenerse ante los riesgos y consecuencias nocivas de los matrimonios prematuros, así como en la obligación de garantizar su desarrollo integral, acorde con lo preceptuado por el artículo 4º, párrafo noveno, constitucional y los instrumentos internacionales de los que México es parte, relacionados con la niñez.

Por lo demás, no coincido con diversas afirmaciones que se hacen en el proyecto, en cuanto al carácter dinámico de los derechos humanos, conforme a principios de progresividad e interdependencia y la tesis 1a. CDV/2014 (10a.) que, desde mi punto de vista, se refiere a cuestiones distintas; al valor asignado a las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, respecto del tema que se analiza, la interpretación del texto anterior del artículo 145 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en relación con la autorización del juez: “previo consentimiento de los padres” –como decía–, basada en una interpretación –a mi juicio– incorrecta y las causas graves y justificadas para otorgar las dispensas, que –a mi juicio– están basadas en conjeturas y la vinculación del derecho al matrimonio con el deseo de formar una familia.

Habiendo salvado estas cuestiones, estoy de acuerdo con el proyecto, con la mayor parte de sus consideraciones; haré –en su caso– un voto concurrente; esto afecta a todas las preguntas y por eso, separándome de lo solicitado por el Presidente, hago esta manifestación en este momento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Expresamente, expuse en una metodología acorde al proyecto, que, además, se había hablado en la sesión previa, y por eso hice esta exhortación; pero, con el derecho que tienen los integrantes del Pleno de manifestar su exposición, sus ideas de la manera que considere más conveniente. Señor Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Gracias, señor Ministro Presidente. Va a ser muy breve mi intervención: coincido con lo dicho por la Ministra Piña, también me separo de consideraciones, muy similar en lo que expuso ella. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Algún otro comentario sobre este apartado? Manifiesto, sobre esta primera pregunta, que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero no así con las consideraciones; coincido en gran parte con la señora Ministra Piña.

En primer lugar, el proyecto dice que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, establece la posibilidad de dispensar el requisito de la edad para celebrar un matrimonio, en el entendido de que el propósito de este instrumento era erradicar el matrimonio infantil. Esta afirmación la suscribo totalmente.

Pero, posteriormente, el proyecto señala que instrumentos más recientes y especializados en mujeres y niños no reconocen la posibilidad excepcional de otorgar dispensas al requisito de edad, y de ahí concluye que esta posibilidad ha desaparecido en una

interpretación evolutiva, que llevó al legislador a no prever su existencia en la Ley General de la materia y al legislador local a eliminarla, sobre eso tengo varias consideraciones:

Primero, el proyecto —parece que de manera implícita— concluye que había una obligación por parte de los Estados a otorgar dispensas, y no coincido con esta afirmación; tal como lo hice en el voto particular de la acción de inconstitucionalidad 60/2016, he sostenido que el hecho de que los instrumentos internacionales permitan ciertas figuras se trata simplemente de una posibilidad que lícitamente se puede tomar por los Estados, pero no la obligación de tomarla; consecuentemente —en mi opinión—, la Convención establece la posibilidad de que los Estados establezcan dispensas al requisito de la edad para contraer matrimonio, la única conclusión que se desprende de este documento —a mi entender— es que las dispensas constituyen una opción válida.

Por otra parte, estimo también que el hecho de que instrumentos posteriores a la Convención que estamos tratando no prevean la posibilidad de los Estados para establecer dispensas al requisito de edad, es insuficiente para considerar, por esa razón, que está derogada la posibilidad de dispensas.

Creo que la posibilidad de dispensas sigue estando en el nivel internacional, puede ser considerada todavía válida, no me parece que esté derogada esta posibilidad; de tal suerte que, en esta primera pregunta —desde mi punto de vista—, estoy de acuerdo con el sentido, pero no creo ni que sea obligatorio otorgar

dispensas ni que se haya derogado esta posibilidad a nivel internacional.

Consecuentemente, votaré a favor de la respuesta que se da a esta pregunta, pero por consideraciones distintas. Señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, señor Ministro Presidente. Estoy de acuerdo con esta parte del proyecto, quizá no deberíamos de hablar de derogación, siento que en el derecho internacional, los distintos instrumentos generalmente no se abrogan o no se derogan, como formalmente se hace en la legislación nacional, pero se interpretan y van evolucionando.

Coincido totalmente con lo dicho aquí, de que la Convención de mil novecientos sesenta y dos no otorgó efectivamente una excepción o un derecho al hacer la salvedad, porque desde su preámbulo —dice concretamente que se tiene que abolir el matrimonio de menores de edad. La salvedad que se establece en ese artículo 2 es permitir que, en el momento, puedan adherirse todos aquellos países —como México— que tenía salvedades en su legislación porque, de ser absoluto, todos esos países o hubieran tenido que hacer una reserva interpretativa en su ratificación por el Senado, o no hubieran podido adherirse hasta que se cambiara la Convención.

Por eso, coincido con lo señalado por el Ministro Presidente y también por la Ministra Norma Piña: la salvedad no constituye ni una excepción ni un derecho que tuviese que respetarse forzosamente.

En lo que coincido con el proyecto es que me parece que las convenciones posteriores, concretamente, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, si bien el tema específico no fue el matrimonio, sí lo abordaron; abordaron el matrimonio tanto de la mujer menor de edad como de los niños en la Convención de los niños y aquí se vuelve a reiterar que tiene que haber una edad mínima y no hay ninguna propuesta de salvedad; por el contrario, interpreto que la idea –precisamente– en la evolución de las nuevas convenciones es que no existan esas salvedades, y también coincido en que, por eso, ni el texto constitucional ni la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en nuestro país, no prevén la salvedad.

En este punto, por lo tanto, estando de acuerdo en que no debemos derivar de esa salvedad un derecho, creo que podemos hablar, si no de derogación, de que, la comunidad internacional, a través de las nuevas convenciones, nos alerta sobre los riesgos del matrimonio infantil. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. La pregunta concreta que se nos formula en este considerando es si el legislador de Aguascalientes, al impedir una posibilidad de dispensa tratándose del matrimonio celebrado entre personas mayores a dieciocho años, viola o no diversos compromisos internacionales.

Lo cierto es que, aun cuando hay adhesiones al sentido del proyecto, casi todas ellas parten de una diferente forma de resolver este cuestionamiento, el cual –para mí– se reduce a un sí o un no; en realidad, el legislador local, al establecer una regla absoluta en el sentido de que nadie puede contraer matrimonio si no tiene dieciocho años, es o no contraria a la Convención.

Pienso que la disposición cuestionada es violatoria del artículo 2 de la Convención impugnada; lo es –precisamente– porque, a partir de un absoluto, impide de modo total la posibilidad de que, en circunstancias diferentes, urgentes o graves, pueda hacer la labor de ponderación, aquella que determine eximir de este requisito.

Lo que importa es determinar primero, antes que nada, como una premisa de trabajo, la mayoría de edad; aquel punto que define la Constitución, a partir del cual todas las legislaciones de carácter local habrán de establecer los requisitos para contraer matrimonio; de tal suerte que la primera vista que tendríamos que dar es conocer si la Constitución ha establecido o no una edad para considerar que hay mayoría de edad: ésta, aunque no es expresa, se deduce de distintos artículos que la propia Carta Fundamental entrega para poder armonizar, evaluar hasta dónde la fórmula de dieciocho años es la que constituye el requisito para obligarse.

Es precisamente así que la mayoría de edad se desprende de la adquisición de la ciudadanía, sin poder establecer una correspondencia vinculante y absoluta entre la ciudadanía y la mayoría de edad, las respuestas que la Constitución entrega a

partir de la ciudadanía equivalen a la capacidad de obligarse –en este caso– frente al Estado, y si la capacidad de obligarse frente al Estado se vincula con la mayoría de edad que la Constitución establece, no como tal el concepto, pero la fija en dieciocho años, es que se ha venido desprendiendo esa conclusión: mayoría de edad equivalente a dieciocho años.

Hay otras disposiciones de la propia Constitución que evidencian esa intención. El artículo 18, en su cuarto párrafo, con toda claridad establece cuál es el sistema a seguir para el enjuiciamiento respecto de quienes han cumplido dieciocho años y, sin referirse a la mayoría de edad, en concreto, habla de los niños y de los adolescentes.

Otro elemento a considerar como uno de los que pueden guiarnos hasta los dieciocho años es el tema laboral, pues en ese son –en el artículo 123, apartado A– muchas las referencias en donde la edad para considerar que se ha tomado una decisión lo suficientemente razonable y meditada, dentro de la madurez que supone la edad y el entregar responsabilidades por los dieciocho años son, precisamente, esos dieciocho años.

Juntando estos y muchos más elementos, podemos descubrir que un concepto de carácter público para contraer y responder a compromisos voluntariamente son los dieciocho años, y esto ¿a qué me lleva? A concluir que, si el artículo 130 estableció que “Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establecen las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan”, esto es, la referencia constitucional hacia

los actos del estado civil, contenida en el artículo 130, tiene que observar estas reglas, es que estableció la edad para contraer matrimonio, esto es, para celebrar un acto del estado civil.

Y si restringe, de tal suerte que nadie pueda contraer matrimonio si no es que ha cumplido estos dieciocho años, me parece que afecta el derecho humano a la libertad de vincularse a cualquier otra persona y tener familia o formar familia, y que, a partir de circunstancias excepcionales, esto es, privilegiando la ponderación de cada caso, la Convención y otros instrumentos internacionales, apelando siempre a la aplicación madura, serena que tienen que hacer los operadores de la ley, es que debe permitir tales circunstancias; en esta perspectiva, la respuesta que tengo –y la tenía formulada de tiempo atrás– ahora no podría saber exactamente cuál es la que el Tribunal Pleno pudiera tener con distintas consideraciones es –para mí– la legislación –así vista– viola el contenido normativo convencional que rige el orden jurídico nacional, pues la posibilidad de entregar a la ponderación un caso grave, siempre tasado, como lo establece el artículo 130 a disposiciones legislativas, permitirán no caminar sobre absolutos sino –en principio– sobre absolutos cuya posibilidad de excepción se entrega a una labor de ponderación, no sé si de juez, no sé si de autoridad administrativa pero, finalmente, posibilidad de ponderación.

Recuerdo –simplemente, para concluir– que una de las máximas que este Tribunal normalmente acoge para resolver circunstancias como éstas, es que: “los absolutos siempre perjudican” y, en el caso concreto, considerar, por vía legislativa, que se está frente a un absoluto y que nadie podrá –entonces– disponer de su propia

libertad para contraer matrimonio en circunstancias urgentes y graves que lo hagan diferente, violaría la oportunidad que las convenciones establecen sobre este particular; por tanto, mi respuesta al caso concreto es: se viola el orden convencional, al impedir de modo absoluto, irrestricto e infranqueable la posibilidad de contraer matrimonio. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. En relación con la exposición que hice sobre los instrumentos internacionales, quiero aclarar que me parece que en derecho internacional no está proscrita la práctica de las dispensas, pero creo que el Estado Mexicano ha dado una protección mayor a los niños en este tema que, por supuesto, me adelanto diciendo que estoy en contra de cualquier forma de matrimonio infantil.

Si vemos, por ejemplo, la Recomendación General núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Observación General núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, en el inciso f) dice lo siguiente:

“f) Que la edad mínima legal para contraer matrimonio para niñas y niños, con o sin el consentimiento de los padres, se fije en los 18 años. Cuando se permita un matrimonio a una edad más temprana en circunstancias excepcionales, la edad mínima absoluta no debe ser inferior a 16 años, los motivos para obtener el permiso deben ser legítimos y estar rigurosamente definidos por la legislación, y el matrimonio solo lo debe permitir un tribunal de justicia con el consentimiento pleno, libre e informado del niño o de ambos niños, que deben comparecer ante el tribunal”.

Por ello, creo que —esto es de dos mil catorce— en el plano del derecho internacional no está proscrita esta práctica pero, desde el punto de vista de nuestra Constitución y la interpretación pro persona que hacemos, me parece que es totalmente válido llegar a esa conclusión, con independencia de la interpretación que demos al tema convencional porque —decíamos— es una posibilidad, no es una obligación, y si el Estado Mexicano da una protección más amplia, tenemos que estar siempre por el principio pro persona a la interpretación más amplia. Sírvase tomar votación sobre este primer apartado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor del sentido, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor del proyecto.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: A favor del proyecto. Señor Ministro Presidente, ¿me permite hacer un comentario?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, claro.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: He escuchado con muchísima atención las exposiciones y veo que hay coincidencias pero también diferencias de puntos de vista; quiero ofrecer —y será para todo el proyecto— que revisaré con todo cuidado las versiones para poderlas tener presentes y, en su caso, si hay coincidencia que pueda llegar a ser mayoritaria, inclusive

con mi voto, me sumaría a esa posición para establecer un criterio firme. En este momento, voto con el proyecto y lo sostengo, pero hago este ofrecimiento —si el Pleno no tiene inconveniente— para que, posteriormente en el engrose, se pueda revisar todo esto y, si es el caso, hacerlo de la manera que lo estoy ofreciendo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Le agradezco mucho, señor Ministro Franco. De hecho, al final de la votación, lo que pensaba hacer y haré es pedirle al señor secretario que vaya tomando nota de los argumentos que se están dando para, una vez que veamos los seis puntos —porque sin duda están íntimamente relacionados—, el Pleno pueda tener una clara posición de cuáles son los argumentos mayoritarios para que el engrose se haga con esos argumentos mayoritarios, cosa que agradezco mucho al Ministro Franco. Continúe, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Estoy con el sentido del proyecto —como lo expresé— y, en general, con distintas consideraciones.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: También con el sentido del proyecto y separándome de consideraciones.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Agradeciendo al Ministro Franco, voy a precisar mi voto, para ver si se logra la votación mayoritaria en cuanto a consideraciones. Estoy con el proyecto, pero sosteniendo que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios admite otra interpretación —a la que me referí—, y tampoco no compartiría el

hecho de que no se haya reiterado ni reconocido la posibilidad de dispensa judicial, porque concretamente en la Recomendación General número 31 —que mencioné— hay un reconocimiento de que pueden existir dispensas judiciales, tratándose de matrimonios infantiles, pero ni es vinculante para el Estado Mexicano y tiene que atender determinadas características. Entonces, me separaría, por esas consideraciones, de los argumentos establecidos en el proyecto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Estoy con el sentido del proyecto, a favor de algunas consideraciones, en contra de otras; anuncio voto concurrente, en su caso. Agradezco al Ministro ponente incorporar los puntos de vista de otros, en relación con el punto.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: En contra, la legislación local es inconvencional.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ZÁLDIVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones.

Dé el resultado, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Me permito informarle que existe una mayoría de diez votos a favor del sentido del proyecto; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente; el señor Ministro Franco González Salas, realiza precisiones sobre el engrose; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de consideraciones; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de consideraciones; la señora Ministra Piña Hernández

precisa respecto de qué consideraciones está en contra; el señor Ministro Medina Mora, en contra de algunas consideraciones, con anuncio de voto concurrente; y el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de algunas consideraciones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor secretario, para evitar que cada uno de las Ministras o Ministros tengamos que repetir por qué nos separamos de las consideraciones, le ruego que analice las versiones estenográficas y vaya haciendo un cuadro de los argumentos de cada uno de los temas; los Ministros que expusieron sobre la totalidad, usted ya tiene los argumentos; para que, una vez que se vote el proyecto, el Ministro ponente pueda tener claridad sobre qué argumentos tienen mayoría y qué argumentos no. Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente, dado el resultado de esta primera votación de fondo, extendiendo mi ofrecimiento para ver si está de acuerdo el Pleno en que me permitan que, una vez que hayamos concluido con el asunto, también si es el caso –conforme al resultado–, pueda revisar los votos que se presenten, porque hubo algunas intervenciones en donde no se presentó específicamente y creo que, con esto, puede ser más fácil lograr construir un argumento –insisto, porque estamos en acción de inconstitucionalidad– sólido para una mayoría.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Les reitero mi solicitud a las señoras y señores Ministros que hice en otra sesión, de que, cuando se aparten de consideraciones, sean explícitos de cuáles son las consideraciones que deben formar la decisión de Corte porque, si no, tenemos engroses donde hay cinco, seis o siete

votos por consideraciones distintas y no sabemos cuáles son, y al final hay un engrose que no representa la decisión del Pleno, pero que después de algunos meses o años decimos: en aquél asunto sostuvimos y realmente no se logró una decisión, entonces es muy importante que vayamos logrando votaciones sobre argumentos que son las consideraciones con ocho votos, las que irán siendo obligatorias.

Entonces, en este caso, el señor secretario hará este esfuerzo y los exhorto a que no tiene que ser una exposición amplia, pero sí, con precisión, se sepa qué argumentos se suscriben y cuáles no de los proyectos.

Dado que tenemos una sesión privada para ver asuntos importantes administrativos de esta Suprema Corte, voy a levantar la sesión, para que esta privada tenga verificativo inmediatamente después que sea desalojado el salón, y convoco a las señoras y señores Ministros a la próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día de mañana, a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:15 HORAS)